

Acuerdo de 24 de abril de 2019, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación del “Servicio de Mantenimiento y reparación de las columnas secas de la red del metro de Madrid”, licitación 6011800233.

Con fecha 15 de abril de 2019, se ha recibido en este Tribunal escrito de don José María Aguilera Vitón, en nombre y representación de Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. y por don Alfonso Aguilar Díaz en nombre y representación de Elecnor, S.A.U. Formulando reclamación, contra el acuerdo de exclusión de su oferta del contrato de referencia.

La recurrente en el escrito de interposición de la reclamación solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del mismo.

El artículo 104.4 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en adelante LCSE) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto reclamado, el motivo que fundamenta la reclamación, los medios de prueba de que pretenda valerse le reclamante y, en su caso, las medidas cautelares, cuya adopción solicite.

Con fecha 15 de abril de 2019 fue solicitado expediente al órgano de contratación junto con el correspondiente informe, que incluye el referido a la medida cautelar solicitada por el reclamante, sin que se haya recibido hasta la fecha.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276948162387091009128**

consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.



En relación con el estado de tramitación del expediente, hay que señalar que la reclamante fue propuesta como adjudicataria del contrato, si bien con fecha 5 de abril de 2019 recibió escrito por el que se le notificaba la exclusión de la licitación por no acreditar la habilitación empresarial para el desarrollo de la actividad.

A la licitación se presentó únicamente otra empresa además de la reclamante.

La reclamación en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados si se produjera la adjudicación y firma de contrato y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSE, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Servicio de Mantenimiento y reparación de las columnas secas de la red del metro de Madrid”.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

A

